

Entrelíneas de la Política Económica

Página 1**Editorial: ¿son o se hacen?****Página 4****La centralidad del empleo como política de Estado****Por Rafael A. Selva****Página 25****Regionalización de la Provincia de Buenos Aires: Un debate abierto****Por Santiago Gahn****Página 35****Subsidios y la Estrategia en Servicios Públicos e Infraestructura****Por Horacio Seillant****DIRECTOR**

Lic. Gerardo De Santis

COORDINADOR

Lic. Germán Saller

CONSEJO EDITORIAL

Lic. Alfredo Iñiguez

Dr. Pablo Lavarello

Lic. Miguel Zanabria

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Lic. Fernando Alvarez

Lic. Julián Barberis

Lic. Guillermo Bellingi

Lic. Roberto Collivignarelli

Lic. Matías Mancini

Lic. Manuel Rodríguez

Lic. Rafael A. Selva

Cdr. Diego Turkenich

Cdr. Fabián Flores

Lic. Julieta Biasotti

Lic. Josefina Marcelo

Lic. Santiago Gahn

Lic. Juan Ignacio López

ÁREA DE PRENSA

Lic. Edgardo Corroppoli

Lic. Federico Serra

María Verónica Torras

¿son o se hacen?

En la escena mediática argentina empezó a irrumpir un tema esencial ante la encrucijada electoral actual. Cuando el kirchnerismo lanza el eslogan “el candidato es el proyecto” surge la necesidad de identificar, lo más claramente posible, aquello que es sustancial al proyecto desmarcándolo de aquello que le es accesorio de forma de tener una vara para poder medir su consistencia en prospectiva.

Las exposiciones del ministro de economía, del secretario de comercio y otros miembros del equipo económico claramente ponen sobre el tapete que el régimen de crecimiento tiene características que le son propias, que lo hacen muy diferente de lo que se aplica en otros países y que Argentina puede mostrar claros resultados positivos (hasta la aparición de la restricción externa), mientras que el resto de los países luchan por recuperar el crecimiento.

Desafiando el statu quo del pensamiento neoliberal, que hoy aún predomina libremente en los planes de estudio de las facultades de ciencias económicas de la Universidad Pública, los Funcionarios identifican claramente a la distribución del ingreso como la locomotora del modelo. El esquema simple indicaría que los aumentos de consumo popular generan un alza de la producción que lo satisfaga y de la inversión cuando las empresas se acercan al uso pleno de la capacidad instalada.

Las formas en que se trata de hacer crecer el consumo son variadas pero todo el arsenal normativo originado en el Estado se articula subordinadamente a la negociación colectiva para que ésta guarde su centralidad en un proceso de aprendizaje institucional que escapa a cualquier manual o receta de ajuste. La negociación colectiva se ha convertido en la piedra fundamental de una nueva jerarquización institucional reemplazando a lo que en la convertibilidad era el “1 a 1”.

Sin embargo, como la evolución del sector formal no fue suficiente para apuntalar el crecimiento del consumo, fue necesario agregar otros programas. La lenta, pero persistente reindustrialización, no alcanza para que todos los trabajadores estén cubiertos por la negociación colectiva, como es el caso de los trabajadores no registrados, los cuentapropistas y los empleados domésticos, básicamente. La presencia de políticas que van desde la Asignación Universal por Hijo (AUH) hasta las jubilaciones, pasando por el Progresar y un sinnúmero de programas que se implementan desde el Estado complementan lo que una estructura semiindustrializada no puede garantizar: que la centralidad de la negociación colectiva (donde trabajadores y patrones fijan autónomamente salarios y condiciones de trabajo) en el aumento del consumo beneficie en forma más o menos homogénea a todos los habitantes de la República.

El régimen de crecimiento se enfrenta a las limitaciones del capitalismo argentino dominado por filiales de empresas multinacionales y grupos financieros

formadores de precios monopólicos. La entrada de pequeños capitales que operan con tecnologías y escalas lejanas de las mejores prácticas internacionales no logran absorber los mayores salarios. Grandes capitales y pequeños tratan de diluir los aumentos salariales conseguidos en la negociación colectiva con aumentos de precios. Frente a lo cual el Estado reacciona en pos de proteger el poder adquisitivo de los salarios con la administración de precios; en el Banco Central se reforma su carta orgánica para que incluya al pleno empleo entre sus objetivos y exige a los bancos a otorgar una línea de crédito para pymes; se arma una compleja red normativa para evitar que la competencia internacional agreda al proceso reindustrializador; se mantienen las retenciones a las exportaciones para procurar disociar el costo interno de los alimentos (principalmente consumidos por los trabajadores) de los precios internacionales, entre otras decisiones de política.

Los limitantes estructurales al crecimiento con inclusión social también se manifiestan a través de la restricción externa-. En simultáneo con la expansión industrial se acrecienta el déficit comercial y se contrae la holgura de divisas. Emerge así un terreno fértil para que reaparezcan los comportamientos especulativos financieros de aquellos sectores con poder (como las grandes comercializadoras del complejo agrario) que buscan beneficiarse de la devaluación de la moneda. En este marco el Gobierno descarta las políticas de ajuste y avanza en medidas que buscan proteger el empleo y el consumo popular. El control del mercado de cambios y la administración del comercio son medidas subordinadas a la esencia del régimen de crecimiento basado en la distribución del ingreso. Sin embargo, la fuerte dependencia a las exportaciones de oleaginosas y cereales y la acotada sustitución de importaciones trae también a discusión la ineludible necesidad del cambio estructural tendiente a paliar la desarticulación de la matriz productiva heredada tras el proyecto neoliberal.

Gracias a la configuración institucional que tiene como prioridad el sostenimiento del consumo y el empleo, la participación de los trabajadores en el ingreso ha pasado el mítico 50% a fines de 2014, según datos de Cuentas Nacionales. Si no hubiera crecido el poder negociador de los sindicatos, habría aumentado la participación de los beneficios empresarios, ante el alza de la productividad experimentada desde 2004 y en un contexto de desaceleración en la creación del empleo.

Sin embargo, ese no es el único esquema institucional coherente por el cual se pueda crecer: el viejo teorema de Helmut Schmidt que dice que los beneficios de hoy serán las inversiones de mañana y los empleos de pasado mañana sigue alimentando el imaginario de la derecha. Dentro de ese esquema se privilegian los derechos de los patrones porque, se argumenta, serán la fuente de la que provendrá el bienestar del resto de la sociedad. Esta política de “seduciendo al capital” tuvo su aplicación en una versión particular en la Argentina con la convertibilidad. El “modelo” ponía en su núcleo el 1 a 1 y el resto se acomodaba para que la convertibilidad funcionara. Así el Banco Central renunciaba a la política monetaria, se eliminaba cualquier mecanismo que se asemejara a una administración de precios, se bajaban los aranceles y la negociación colectiva se llevaba al nivel empresa mientras se generalizaba el derecho derogatorio y los contratos basura. Esto acompañado con un “ejército de reserva” de desocupados del 17 % de la P.E.A. actuando como disciplinador.

A los amnésicos que “olvidaron” esa década signada por las recomendaciones de política del Consenso de Washington, se puede aconsejar que miren lo que ocurre actualmente en otros países donde, sin llegar al fundamentalismo propio de los conversos que mostraran los menemistas convertidos de peronistas en liberales, estas políticas se siguen aplicando,

por ejemplo, en varios países de Europa y, sin ir tan lejos, en Brasil.

Así, Gran Bretaña, considerada el ejemplo en la aplicación de políticas del lado de la oferta, se encuentra con un PBI que crece cada vez más lentamente, verificándose caídas en sectores claves como el manufacturero. Si bien este crecimiento, que es el más bajo desde el último trimestre de 2012, podría ser la envidia de otros países europeos, visto de cerca esconde una triste realidad: un retroceso de la industria con un estancamiento de la productividad y una marcada dependencia del sector servicios. ¿Para qué tantos sacrificios de los trabajadores británicos?, la inversión no responde a los regalos, el crecimiento sigue dependiendo en gran parte del consumo y los beneficios se concentran en el sector financiero y en burbujas inmobiliarias, marcando una incongruencia en el largo plazo.

En Brasil el panorama es un poco más desconsolador porque se trata de un gobierno cuyo origen es el partido de los trabajadores que para contener una avanzada desestabilizadora intenta implementar el derecho derogatorio con la terciarización laboral.

En este contexto por demás adverso, se da la paradoja que quienes a priori deberían ser los más entusiastas partidarios de que el Kirchnerismo haya reintroducido al laborismo de sus orígenes en el ideario del peronismo, se han transformado en los críticos más virulentos del gobierno. Para esto esgrimen argumentos sectoriales (los de una mínima parte de los trabajadores, la aristocracia obrera) sin importar que vayan en desmedro del conjunto de los trabajadores (como clase). La reciente jerarquización de la negociación colectiva se encuentra con escollos que la profundización del proyecto debería superar, entre ellos, el grado de fragmentación y descoordinación de las paritarias y el todavía bajo nivel de cobertura (que se soluciona con más industrialización). Sin embargo, el crecimiento articulado alrededor de la negociación colectiva y la reafirmación de los derechos laborales generó una renovación del sindicalismo de la mano del aumento de la presencia de los delegados en los lugares de trabajo, sin que por lo tanto existiese una renovación de las cúpulas sindicales.

El rol a desempeñar por el sindicalismo es clave para la continuidad del régimen de crecimiento. Tanto en torno a la profundización de las paritarias y el sostenimiento del pleno empleo frente a quienes buscan el desempleo como forma de ajuste y contención salarial, como respecto a la consolidación de una clase obrera industrial que acompañe y sea central en un proceso de reindustrialización.

A pesar de esto las cúpulas sindicales, en vez de comprender y asimilar el nuevo rol convirtiéndose en actores principales en el nuevo régimen de crecimiento, lo que podría jugar relegitimándolos, se alían con la derecha liberal. Tal vez esto se deba a una añoranza de un funcionamiento corporativista, donde los sindicatos formen parte del gobierno, desbordando el ámbito laboral y actuando en la esfera estrictamente política (que fuera ensayado por Alfonsín, cuando le otorgó a una parte del sindicalismo el Ministro de Trabajo). Esta suerte de neovandorismo, teje alianzas con sus históricos detractores, acérrimos enemigos de la negociación colectiva en particular y del bienestar de la clase trabajadora en general.

Lo paradójico es que si esos políticos logran acceder al gobierno del país irán hacia un modelo a la Schmidt privilegiando una distribución del ingreso favorable al capital. Seguramente la nueva base sindical no estará muy contenta cuando un eventual gobierno liberal vaya contra la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores, lo que naturalmente interpelará a las cúpulas sindicales.

Pareciera que hay quienes prefieren pegarse un tiro en el pie antes de avanzar hacia un futuro de dignidad.